

Consulta Pública previa para elaborar la Ley de Función Pública de Aragón.

Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos)	<p>Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.</p> <p>Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.</p>
Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa	<p>La normativa vigente no ha desarrollado algunos aspectos del Estatuto Básico del Empleado Público.</p> <p>Los sistemas de acceso a la función pública deben ajustarse a la nueva realidad social, diferente a la existente cuando se aprobó la ley original aragonesa de función pública, que se ha adaptado con sucesivas reformas parciales, pero que requiere un replanteamiento global, que evite los retales normativos.</p> <p>También es preciso regular las condiciones de trabajo de conformidad con las disposiciones que la Unión Europea ha ido emitiendo en materia de trabajo, que afectan al empleo público.</p>
Necesidad y oportunidad de su aprobación	<p>Necesidad: la actual legislación aragonesa en materia de función pública, si bien se ha ido reformando con el paso de los años, requiere una renovación con perspectiva holística.</p> <p>Oportunidad: promover la aprobación de una ley que debe perdurar en el tiempo, y poder ser aplicada para la mejor prestación de los servicios, con independencia de las alternativas políticas que se sucedan en la Comunidad Autónoma.</p>
Objetivos de la norma	<p>Desarrollar los artículos 23 y 103 de la Constitución, de acuerdo con los valores y el contexto social actual.</p> <p>Acomodar el sistema de categorías de empleados públicos al sistema educativo.</p> <p>Establecer un régimen de carrera y promoción profesional que mejore el funcionamiento de la organización.</p> <p>Crear un marco homogéneo de condiciones de trabajo.</p>



	<p>Implantar mecanismos novedosos en la administración autonómica, como la evaluación del desempeño de las funciones, o la figura del directivo público profesional, previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.</p> <p>Establecer el marco del sistema retributivo.</p> <p>Regular el conjunto de deberes y derechos de los empleados públicos, así como el sistema de situaciones administrativas en que se pueden encontrar los empleados públicos.</p> <p>Desarrollar el sistema de integridad en el ejercicio de las funciones públicas, en la doble vertiente de establecimiento de herramientas de prevención y persecución de la corrupción, así como la mejora en la toma de decisiones mediante el desarrollo de una cultura ética de la organización.</p> <p>El conjunto integrado de la ley debe perseguir la meta principal de mejora de la eficacia en la prestación de los servicios a los ciudadanos.</p>
Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias	<p>No existen alternativas regulatorias ni no regulatorias.</p> <p>El contenido que se desarrolla, derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución, exige una norma con rango de ley.</p>